

Resumen ejecutivo

La economía de la República Dominicana experimentó una expansión de 7.0% del producto interno bruto (PIB) real durante 2018, ritmo muy similar al promedio observado entre 2014 y 2016 y una notable recuperación tras la ralentización de 2017 (4.6%). Tal dinamismo económico fue el más sobresaliente en la región latinoamericana y uno de los diez mayores a nivel mundial.

Casi todas las actividades registraron tasas de crecimiento positivas, excepto explotación de minas y canteras. Las que mostraron mayor dinamismo fueron comunicaciones (12.3%) y construcción (12.2%). Esta última actividad se convirtió en la mayor generadora de valor agregado, desplazando a la manufactura local en esa posición.

Por el enfoque del gasto los componentes de la demanda interna que mostraron un mayor crecimiento fueron formación bruta de capital fijo (FBKF, 13.2%) y consumo agregado (4.9%). En el primer caso, la FBKF volvió a crecer tras la desaceleración de 2017, con una incidencia relativa de la mitad del crecimiento de 2018, casi a la par del aporte del consumo total, a pesar de que su ponderación es una cuarta parte del PIB y equivale a un tercio del consumo. El aumento acumulado de la inversión (esencialmente privada, con un 89% de participación) en el último lustro es equivalente al verificado durante todo el decenio previo (entre 2004 y 2013). El nivel actual de inversión privada es el doble del observado en 2011 y casi el triple del verificado en 2007. La inversión pública aumentó apenas un 2%.

Del lado del consumo, el incremento en el correspondiente al sector privado (5.3%) compensó la contención del público (2.8%). Este aumento del consumo privado fue el de mayor magnitud en los últimos 8 años (6.9% en 2010), y se debe, entre otros factores, al importante incremento en los ingresos laborales y a los efectos de las medidas flexibilización de la política monetaria adoptadas en agosto de 2017.

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones (6.7%) fue mayor que el verificado en 2017, impulsado tanto por el incremento en exportaciones de bienes (especialmente por las zonas francas) como por los ingresos en turismo. En tanto que las importaciones aumentaron, con lo que se revirtió la desaceleración y el decrecimiento observados durante 2016 y 2017.

Además de los datos estadísticos de cuentas nacionales, otros indicadores analizados demuestran la recuperación antes señalada del crecimiento. El índice de actividad manufacturera (IMAM), que elabora la AIRD, promedió 59 puntos y se mantuvo todo el año sobre el umbral de expansión (50), con máximos históricos en mayo y noviembre. Las empresas de mayor tamaño (más de 200 empleados) fueron las que mostraron mejores resultados. Las variables con mejor desempeño fueron las referentes a volúmenes de ventas (63.0) y de producción (62.7), con aumentos de 16.6% y 12.9%, respectivamente. Las ventas (operaciones totales) registradas en la DGII (deflactadas) crecieron 8% en términos reales, en línea con el incremento real del PIB. El volumen de operaciones en el sector servicios creció 8.6% en términos reales, con una incidencia relativa de 81.3% en el incremento total.

Otros indicadores evidencian el dinamismo de la economía: los montos por recaudaciones de peajes del fideicomiso RD Vial se incrementaron 10.8%, los préstamos (deflactados) al sector privado 8.9%, el medio circulante 9.7% promedio real, las importaciones no petroleras (deflactadas) 11.6%, la compra de energía 4% y los cotizantes formales a la seguridad social (y el salario base promedio) en 6%. Al comparar las tasas de crecimiento interanuales de este conjunto de indicadores, se aprecia un patrón de recuperación más marcado, respecto a 2017, durante el primer semestre de 2018.

El déficit Sector Público no Financiero (SPNF) continuó en 2018 su tendencia, observada desde 2013, a la disminución observada desde 2013, tras el aumento registrado en 2017 a causa del impacto de las lluvias que afectaron el país desde finales de 2016 y que conllevó un costo fiscal de 0.3% del PIB. El nivel de ese déficit en el 2018 se situó en 2.7% del PIB, el más bajo desde 2007 (si se excluye en 2015 la compra a descuento de la deuda de Petrocaribe), lo que implicó una reducción de 0.6 puntos del PIB en relación con el año anterior. Tal evolución es explicada por una disminución en el déficit del gobierno central de un punto, hasta 2.4% del PIB, mientras que el resto del SPNF pasó de un superávit de 0.2% del PIB a un déficit de 0.3%. El balance primario, el cual excluye del balance total el pago de intereses de la deuda, registró un superávit de 0.1% del PIB. Si al déficit del Sector Público no Financiero se le añade el déficit cuasifiscal del Banco Central, el cual se mantuvo igual al año anterior (1.2% del PIB), el balance del Sector Público Consolidado cerró el año 2018 en 3.8% del PIB, inferior al 4.5% de 2017.

Durante 2018, los ingresos fiscales ascendieron a RD\$602,410.3 millones (\$603,375.4 millones con donaciones), cifra equivalente al 15.0% del PIB, que significó un crecimiento de RD\$65,217.3 millones (12.1%) respecto al año anterior y un cumplimiento de 100.2% del monto presupuestado. La presión tributaria se mantuvo en 13.9%. El ITBIS, los impuestos sobre la renta (ISR) de personas jurídicas y físicas y los impuestos a hidrocarburos fueron los de mayor peso y representaron 65% de los ingresos fiscales (incluyendo donaciones). Las recaudaciones por concepto de ITBIS (tanto interno como externo) ascendieron a un total de RD\$194,725.0 millones, con un aumento anual de 14.8%, lo que evidencia más eficiencia recaudadora, puesto que el crecimiento nominal del consumo privado fue de 9.6%. Los montos de impuestos por ingresos de las personas físicas ascendieron a RD\$51,425.2 millones, para un crecimiento de 18.1% y un nivel de cumplimiento de 112.2% de lo estimado en el presupuesto. Este aumento se corresponde con el incremento en 13.5% en el sueldo promedio de los trabajadores asalariados (según la ENCFT), así como con la regularización de asalariados con más de un empleo, a raíz de la notificación por parte de la DGII a más de 2,000 contribuyentes.

Las concesiones mineras generaron ingresos que ascendieron a RD\$8,735.2 millones, 43.6% inferiores a los recaudos de 2017. Esta reducción fue causada por una menor producción de oro, cuyo volumen exportado cayó en 6.6%. Por otro lado, los ingresos por el diferencial del gas licuado de petróleo ascendieron a RD\$8,060.9 millones. Esta fuente de ingresos surgió a raíz de lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 243-17, que sustituye la resolución núm. 365 BIS del MICM por una contribución al Fondo Especial de Solidaridad para la Prevención y Reconstrucción en las provincias impactadas por los efectos del cambio climático. Finalmente, se generaron ingresos extraordinarios por un monto de unos 13 mil millones de pesos, un 56% más que en 2017. El 73% de esos ingresos correspondió a pagos por ganancias de capital que se generaron por la venta del 30% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana a la empresa Ambev.

El gasto del Gobierno Central, sin incluir las aplicaciones financieras, fue 17% del PIB, con un crecimiento de 10% respecto a 2017 (12% si se ajusta el gasto antes indicado por las lluvias). El gasto público total, incluyendo aplicaciones financieras, ascendió a RD\$810,742.2 millones. El gasto primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se situó en RD\$562,823.3 millones, lo que representó un crecimiento nominal y real de 4.7% y 1.1%, respectivamente.

El gasto corriente ascendió a RD\$580,209.0 millones, equivalente a 84.7% del gasto sin aplicaciones financieras y 14.4% del PIB, y registró un crecimiento de 16.4%. En contraste, el gasto de capital mostró un decrecimiento de 16.2% (RD\$20,370.4 millones) para situarse en RD\$105,126.6 millones, cifra equivalente a 17.9% del gasto total y 2.6% del PIB. La disminución del gasto de capital se corresponde en gran medida con la caída de 25.1% en las transferencias de capital, particularmente

las correspondientes al sector eléctrico, y aun excluyendo el gasto extraordinario de las lluvias de 2017, la reducción alcanzó un 7.9% en 2018. Las menores necesidades de recursos para la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina explican que las transferencias al sector eléctrico bajaran de 1.5% a 1.1% del PIB.

Según la clasificación funcional del gasto, las erogaciones del Gobierno Central muestran la siguiente distribución: servicios sociales (46.4%), intereses de la deuda (19.1%), servicios generales (18.6%), servicios económicos (15.2%) y protección del medio ambiente (0.6%). Tal como se ha venido observando en los últimos años, el gasto social se mantiene como prioridad nacional (7.9% del PIB). El 93.3% de este gasto social se distribuye entre educación (52.3%), salud (21.7%) y protección social (19.3%).

Los principales proyectos de inversión pública fueron: construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar (RD\$2,367.6 millones), construcción de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo -desde el Puente de la 17 hasta Megacentro- (RD\$2,202.6 millones), mejoramiento de la infraestructura vial en la provincia de Santiago (RD\$1,516.1 millones) y construcción de la carretera turística Gregorio Luperón en Puerto Plata (RD\$1,380.5 millones). Al examinar la distribución del gasto de capital según regiones de planificación, se aprecia que tres cuartas partes se concentró en Ozama o Metropolitana (63.2%) y Cibao Norte (10.7%), aunque en términos per cápita la región de Enriquillo es la de mayor inversión estimada por habitante.

Al cierre de 2018, el volumen de deuda pública total o consolidada se ubicó en US\$40,975.4 millones (50.4% del PIB), con un aumento de 10.1% respecto a diciembre de 2017, similar al promedio observado en el periodo 2004-2017 y mayor en 3.1 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento de la economía medido en dólares (6.9%). Este resultado se debe principalmente a incrementos en la deuda externa por US\$2,735.9 millones (14.3%), lo cual se vio influenciado por el aumento en la emisión de bonos soberanos en US\$3,032.7 millones (26.2%), debido a condiciones propicias de mercado. Cabe destacar que en febrero de 2018 se colocó por primera vez un bono internacional denominado en pesos dominicanos, por un monto ascendente a RD\$40,000 millones, a un plazo de 5 años y un 8.9% de tasa de interés o cupón. En otro orden, en un análisis de la capacidad pago del servicio de la deuda del SPNF (interna y externa), se observa que en 2018 ese servicio redujo su participación en los ingresos corrientes en 0.9 p.p. respecto al año anterior, y se colocó en 36.0%; estos pagos de deuda representaron 5.4% del PIB.

Luego de las medidas de política monetaria expansiva aplicadas por el Banco Central (BCRD) en el segundo semestre del año 2017, la economía experimentó un repunte en las condiciones macroeconómicas, específicamente alto crecimiento real y robusta creación de empleo, con niveles de inflación dentro del rango meta establecido en el Programa Monetario. Durante el primer semestre de 2018, las presiones observadas sobre el nivel de precios, en un contexto de crecimiento económico por encima de su ritmo potencial, junto con el panorama de incertidumbre a nivel internacional, fueron las principales causas de que la autoridad monetaria decidiera, en su reunión del 24 de julio de 2018, implementar medidas de política con un sesgo restrictivo, al incrementar en 25 puntos básicos (pbs) la tasa anual de política monetaria (TPM), que pasó de 5.25% a 5.50%.

Las presiones sobre el nivel de los precios del primer semestre 2018, si bien se consideraron fundamentalmente de origen externo, sugerían riesgos importantes que podían comprometer el cumplimiento de la meta de inflación. Adicionalmente, la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas (EEM) mostraba algunos cambios en las expectativas del mercado sobre la inflación futura. Mientras

que durante casi todo 2017 los agentes esperaban una inflación a 12 meses en la parte baja del rango meta, en los primeros meses de 2018 se produjo un incremento en la inflación esperada hasta alcanzar 4.67% en agosto.

Como resultado de la política monetaria implementada, la inflación, medida a través de la variación del IPC, tuvo un aumento interanual de 1.17% en diciembre 2018 (comparado con diciembre 2017), el menor en casi 5 décadas y muy inferior al 4.2% registrado en 2017. Es evidente que las presiones inflacionarias mencionadas anteriormente se dispararon en los últimos meses de 2018, ante un cambio de tendencia en los precios internacionales de petróleo y una mayor oferta interna de productos alimenticios. La inflación subyacente -que aísla las variaciones de precios volátiles de bienes alimenticios y bebidas, los combustibles y los servicios administrados (energía eléctrica y transporte), lo que permite medir las presiones inflacionarias de origen monetario- cerró el año en 2.47% interanual, ya 4 años seguidos por debajo del rango meta (3%-5%).

Al analizar el comportamiento de la inflación desglosado por grupos de bienes y servicios, casi un tercio (30.2%) del incremento acumulado (1.17%) estuvo explicado por el aumento en transporte (2.03%), que también explica una cuarta parte de la inflación promedio del año. Tal evolución estuvo asociada con los mayores precios internos de los combustibles durante los primeros 10 meses del año, ocasionados por la subida en los precios internacionales del petróleo durante ese periodo. No obstante, en los últimos dos meses, con la caída del precio del petróleo, el grupo transporte mostró variaciones negativas, lo que contrarrestó de alguna manera la alta incidencia que había ejercido sobre la inflación acumulada.

Tras la implementación de la medida de política monetaria en el mes de julio, la tasa de crecimiento interanual promedio de los préstamos al sector privado en moneda nacional fue de 12.0% a partir de agosto, inferior en 1.1% al promedio registrado entre enero-julio, aunque en línea con el crecimiento nominal de la economía. A pesar de las condiciones financieras algo restrictivas, es evidente que el crecimiento en el crédito fue producto de un mayor dinamismo de la actividad económica. Los sectores con mayor incremento en los montos prestados por las EIF/OSD fueron industrias manufactureras (31.4%) y hoteles (15.8%), además de los préstamos de consumo (10.9%) e hipotecarios (10.1%). Un análisis territorial indica que Montecristi (62.2%), Santiago Rodríguez (60%), Elías Piña (37.3%) y El Seibo (36.4%) fueron las provincias con mayor aumento relativo en los empréstitos.

Desde marzo 2018 se destaca la reactivación de las operaciones interbancarias, luego de mantenerse reducidas durante 2017. En los últimos 10 meses del año, estas operaciones promediaron RD\$24.1 mil millones, valor que equivale al monto total negociado en todo 2017. La dinámica de las operaciones interbancarias redujo levemente su tasa de interés, que promedió 5.8% durante 2018, 54 pbs por debajo del promedio del año anterior (6.3%).

Luego de la tendencia decreciente que habían mostrado en el año anterior, en 2018 las tasas de interés reales (ex ante) de los bancos múltiples experimentaron cierta tendencia creciente, aunque algo volátil en el caso de la activa. Los agregados monetarios comenzaron a reflejar las condiciones restrictivas durante la segunda mitad de 2018, específicamente en el periodo agosto-diciembre, lo que se reflejó en menores tasas de crecimiento a las registradas el año anterior. En términos interanuales (diciembre 2018 vs. diciembre 2017), su aumento se mantuvo por debajo del incremento nominal del PIB: el medio circulante (M1) aumentó en 6.6% (12.2% en 2017), la oferta monetaria ampliada (M2) en 4.5% (10.3% en 2017) y el dinero en sentido amplio (M3) en 6.6% (9.7% en 2017). Los billetes y monedas en poder del público crecieron 14.3% y los depósitos y valores mostraron un crecimiento de 8.1%, el más reducido en los últimos diez años.

Con respecto al mercado cambiario, la tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del dólar estadounidense fue de 49.43 pesos por dólar, y para la venta 49.51 pesos por dólar, lo que equivale a una depreciación promedio de 4.2%, la mayor observada desde 2014.

La cantidad de entidades de intermediación financiera (EIF) pasó de 58 en 2017 a 51 en 2018, debido al cierre de algunas pequeñas. El 86.5% de los activos brutos (RD\$1.78 billones a diciembre 2018) correspondía a bancos múltiples. El coeficiente de solvencia del conjunto del sistema cerró el año en 17.1%, por encima del mínimo legal (10%), mientras que la tasa de morosidad se ubicó en 1.6% y los indicadores de rentabilidad aumentaron a 2.4% (ROE) y 20% (ROA).

Los valores en circulación emitidos por el BCRD alcanzaron en diciembre 2018 un monto de RD\$553,356.4 millones, con un crecimiento de 15.1% respecto al cierre del año anterior, lo que indica una reactivación en la tasa de crecimiento, luego de dos años de experimentar un aumento moderado. El monto de los valores emitidos por el Banco Central fue equivalente a 13.7% del PIB, superior en 0.4 p.p. a la proporción de 2017. La madurez promedio fue de 49.7 meses, 2.4 meses superior al plazo promedio de vencimiento de los instrumentos del año anterior. Además, la tasa de interés promedio de la cartera de valores cerró 2018 en 12.54%, inferior al rendimiento promedio de 2017 (13.92%), lo que evidencia que se mantiene la tendencia a la disminución del rendimiento del portafolio, producto de que las colocaciones de instrumentos nuevos durante el año en general se realizaron a rendimientos más bajos.

En los últimos años el mercado local de valores ha exhibido un importante y significativo dinamismo. La gran mayoría de las operaciones (94.6%) en 2018 fueron extrabursátiles (OTC), es decir, se llevaron a cabo de forma directa entre las partes, proporción mayor a la que se había registrado en 2017 (92.3%). El 88.5% de los montos transados se realizó en pesos dominicanos. El volumen global combinado de todas las operaciones liquidadas alcanzó los RD\$2.53 billones (equivalente a 1.9 veces el agregado M3 y 61.5% del PIB nominal), con un crecimiento de 13.2% respecto a 2017, en especial mediante la modalidad OTC, cuya tasa de crecimiento fue de 16%.

En el ámbito internacional, el ritmo de crecimiento de la economía mundial durante 2018 fue afectado por varios acontecimientos, entre los que se destacan las tensiones comerciales y el aumento de los aranceles entre EE. UU. y China, las condiciones financieras todavía restrictivas y la agudización de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas economías. A pesar de ello, el positivo desempeño económico estadounidense reflejó los efectos de la reforma fiscal aprobada en 2017.

El saldo negativo de la balanza de bienes (US\$9,301.3 millones), el más alto registrado en la presente década, se incrementó en 2018 en 22.4% respecto al año anterior, impulsado especialmente por un alto crecimiento de las importaciones (14.0%), frente a una dinámica más moderada de las exportaciones (7.6%). Esa variación rompió la tendencia de los últimos años a disminuir el déficit de la balanza de bienes y dio lugar a un incremento notable en el déficit por cuenta corriente, que no pudo ser compensado por las demás cuentas que la componen.

El valor total las exportaciones (nacionales y zonas francas) fue de US\$10,907.6 millones, y su incremento fue 2.6 veces mayor que el observado en 2017. Las exportaciones nacionales tuvieron un incremento de 5.7% y las de zonas francas de 9.1%. En las nacionales, se destaca el crecimiento en valor de los bienes adquiridos en puerto (12.2%), seguidos por los productos tradicionales (10.9%), los productos menores (8.4%) y, por último, los minerales (0.2%).

Según las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2010 las exportaciones dominicanas de mercancías significaron el 0.044% de las mundiales, y para 2018 ese coeficiente se

había elevado a 0.056%. Los destinos de las exportaciones nacionales mantienen un patrón fundamentalmente estático. Estados Unidos, con una ponderación ligeramente inferior a la del pasado año (30.4% en 2018 vs. 31.8% en 2017), es el principal mercado también para las exportaciones nacionales. Haití y Europa ocupan las posiciones segunda y tercera.

Las importaciones totales de bienes experimentaron un notable incremento en 2018, 8.2 veces mayor al verificado en 2017, impulsadas predominantemente por las importaciones nacionales (17.0%), ya que las de zonas francas crecieron apenas 2.5%. En las importaciones nacionales, los combustibles aumentaron 30% (adicional al 22% de subida en la factura petrolera en 2017), por incrementos en precios y volúmenes. El resto de las importaciones nacionales creció 13.7%, en contraste a 2017 cuando habían disminuido 3.7%. Clasificadas por grandes categorías económicas, todas las importaciones nacionales (sin combustibles) presentaron aumentos en el valor: bienes de consumo, la de mayor ponderación, (8.9%); suministros industriales (16.7%); y bienes de capital (19.3%).

En la cuenta de ingreso secundario, el saldo neto de las remesas familiares se colocó en US\$5,964.9 millones, con un incremento de 9.4%. Según estimaciones del Banco Central, la cuota de participación de las remesas procedentes de Estados Unidos aumentó 3.5 p.p. (77.4%). Este dinamismo de las remesas procedentes de Estados Unidos se corresponde con el experimentado en la economía y el mercado de trabajo de ese país.

La balanza de servicios aumentó su superávit en 6.1%, ritmo ligeramente inferior al registrado en 2017 (6.6%), para alcanzar US\$5,885.6 millones. Su componente más importante, los ingresos por viajes, registró un crecimiento de 5.2% y se colocó en US\$7,560.7 millones. El dinamismo de estos ingresos se explica por el incremento de 4.9% en el número de turistas, acompañado por un mayor gasto diario promedio (2.2%). En general no se advierte variación significativa en la distribución de visitantes no residentes según su nacionalidad, con los estadounidenses incrementando su participación hasta el 39.8% del total.

Dados los resultados previos de las sub-balanzas, el déficit de la cuenta corriente se situó en 2018 en US\$1,159.6 millones (1.4% del PIB), casi 9 veces superior al registrado en 2017, lo cual significó una ruptura en la tendencia decreciente de ese déficit iniciada en 2011. Los flujos de inversión extranjera directa (IED) contribuyeron a financiar el déficit por cuenta corriente, al alcanzar un monto de US\$2,535.3 millones, similar al promedio de la última década. Además, la inversión de cartera se ha convertido, desde 2013, en un importante componente de la cuenta financiera. En 2018 alcanzó un monto superior al de la IED, con un valor absoluto de US\$2,696.1 millones y un incremento de 53.5% en relación con 2017. Este crecimiento está reflejando una modificación en el financiamiento al sector público, más orientado hacia colocación de bonos soberanos en el mercado de capitales internacional. En vista de estas evoluciones, el tradicional saldo deficitario de la cuenta financiera fue de US\$2,711.7 millones, superior en US\$591.0 millones al de 2017 y en US\$1,552.1 millones al déficit de la cuenta corriente, exceso este último que se distribuyó fundamentalmente entre cubrir una salida de recursos por errores y omisiones de US\$715.5 millones e incrementar los activos de reservas en US\$848.5 millones. Al cierre de 2018, el monto acumulado de las reservas internacionales netas alcanzó US\$7,627.1 millones, equivalente a 3.9 meses de importaciones de bienes y servicios.

Según los datos arrojados por la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), el 60.0% de la población de 15 años y más se encontraba ocupada en 2018. La ocupación evidenció una evolución positiva, al aumentar 3.6%, tasa de incremento superior a la mostrada en 2017 (2.8%). Tal desempeño se explica por la generación de 156,598 puestos de trabajo adicionales. En contraste, la tasa de desocupación abierta, proporción de la población económicamente activa que no tenía trabajo, buscó activamente y no lo consiguió, aumentó ligeramente, al pasar de 5.5% en 2017 a 5.7% en 2018.

Esto se debió al robusto incremento en la PEA, que se incrementó en 173,352 personas (3.7%) durante 2018, lo que refleja un favorable desempeño de la oferta laboral ante expectativas alentadoras en el mercado laboral.

La dinámica de generación neta de empleos se corresponde con la expansión económica en casi todas las ramas de actividad, con incrementos destacados en comunicaciones (13.5%), intermediación financiera (11.2%) y construcción (9.2%). En términos de incidencia, el sector servicios fue el que más incidió en la evolución positiva del empleo (2.6 de 3.6 p.p.). En lo que respecta a la productividad laboral promedio, se observa una aceleración de 1.7 p.p. en su crecimiento (4.1% en 2018 y 2.4% en 2017).

Más del 36.8% del incremento la PEA, correspondió a personas con edades comprendidas entre los 25 y 39 años. En este mismo rango de edad se observa una disminución de los desocupados, lo que, combinado con los movimientos en el resto de los indicadores laborales, sugiere que para el periodo analizado la totalidad de los traslados a la PEA en este grupo etario fueron hacia la ocupación. La tasa de actividad muestra una mejoría en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pues pasó de 49.0% en 2017 a 50.4% en 2018; sin embargo, la brecha de género en dicho indicador empeora ligeramente.

La tasa de actividad y la tasa de ocupación por zona de residencia muestran una tendencia a la convergencia, con un nivel de desocupación menor en la zona rural. Por región de desarrollo, Yuma es la que registra mayores tasas de actividad y de ocupación; en contraste, las tasas de desocupación más altas se observan en las regiones Valdesia (9.2%) e Higuamo (9.1%). En esta dimensión territorial, es relevante analizar las brechas de oferta y demanda de educación y formación técnico profesional.

Durante el período 2000-2018, la participación relativa de los trabajadores con nivel educativo secundario en el total de ocupados aumentó 10.4 p.p. y se colocó en 37.0% en el último año. Una tendencia similar se observa en el nivel universitario, el cual pasó de 16.4% del total de ocupados en el año 2000 a 23.3% en 2018. Cuando se analiza la desagregación de ocupados por nivel educativo según sexo, se destaca el gran crecimiento mostrado por los hombres ocupados con nivel universitario. Tras la caída exhibida en el año anterior (-2.1%), este grupo repuntó significativamente (12.8%); de hecho, 1 de cada 3 empleos netos creados en 2018 correspondió a este grupo particular, y en ese nivel educativo el 86.6% de la ocupación total creada fue masculina.

El número de trabajadores que se desempeñaban en condiciones de informalidad se incrementó en 1.9%, fundamentalmente a causa del aumento algo más de 46 mil trabajadores por cuenta propia. De todas maneras, la informalidad total se ubicó en 57.6% de los ocupados, con una disminución de 0.9 p.p. respecto al año anterior, dado el mayor crecimiento (5.9%) de los trabajadores formales. El 51.0% de los ocupados en 2018 pertenecían a la categoría ocupacional de asalariados, que fue la que presentó el mayor dinamismo, con una tasa de crecimiento de 5.3% con relación al año anterior. El incremento en el número de asalariados se asocia a la creación de 72,012 puestos de trabajo en el sector privado y 44,076 en el sector público. Desde la perspectiva sectorial, de manera similar al año anterior, la actividad de construcción sigue siendo la de mayor dinamismo del empleo dentro del sector formal (22.7%), aunque con una tasa de crecimiento notablemente inferior a la de 2017 (40.5%).

En cuanto a las remuneraciones laborales, el ingreso monetario promedio mensual en la ocupación principal creció 11.4%, muy superior al 4% registrado en 2017, mientras que el ingreso promedio por hora en términos reales aumentó 8.3% (RD\$6.5). En cuanto al sexo, el ingreso de las mujeres registró o un incremento ligeramente mayor que el de los hombres, 11.7% vs. 11.0%, lo cual produjo la reducción del diferencial (brecha bruta) en ingreso por hora de 6.2% en 2017 a 4.9% en 2018.

En enero 2018 se hizo efectivo el aumento realizado de manera parcial al salario mínimo legal (SML) de los trabajadores que prestan servicios en las zonas francas industriales del país. Esta resolución del Comité Nacional de Salarios implicó que, en términos reales, el SML en ese sector mostrara una tasa de crecimiento de 12.0% respecto al año anterior. Para los trabajadores de empresas privadas no sectorizadas y de hoteles, bares y restaurantes, los SML no se modificaron en 2018, pero para el promedio del año mostraron tasas de crecimiento real de 6.6% y 4.6% respectivamente como resultado de los incrementos que se habían realizado en junio de 2017.

En julio 2018, República Dominicana presentó el primer Informe Nacional Voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual incorpora un estado situacional en materia de oferta programática e indicadores de los 17 ODS, el estado de gobernanza e institucionalidad y articulación multiactores (alianzas) que se ha estado desarrollando en el país, así como el estado actual y los desafíos de dos de los aceleradores seleccionados. Posteriormente, en octubre 2018, el Banco Mundial divulgó los datos del Índice de Capital Humano, el cual alinea con los indicadores 3.2, 3.4, 4.1 y 4.2 de los ODS salud y educación. Aunque se reconoce que las mejoras en estas áreas son importantes per se, por las mejoras de bienestar para las personas, además se puede verificar que mejores resultados en las mismas también contribuyen con la productividad y la prosperidad económica en general.

La favorable evolución del ámbito económico permitió que se siguiesen registrando progresos en las condiciones de vida y bienestar de la población. El 46.4% del gasto público (sin aplicaciones financieras) (RD\$318,170.2 millones, equivalente al 7.9% del PIB) estuvo dirigido a los servicios sociales, proporción ligeramente inferior a la de 2017 (48.5%) La función educación continuó con el mayor peso (52.3%) dentro del gasto social; su ejecución fue de RD\$166,404.1 millones, equivalente a 4.1% del PIB.

Los subsidios focalizados, que significan 55.3% de la ejecución total en asistencia social, mostraron un incremento de 1.2% respecto al valor de 2017. Comer es Primero sigue siendo el más importante programa de transferencias condicionadas (84.0%), con una ejecución de RD\$8,315.7 millones, 3.6% más que en 2017. El número de hogares beneficiados con algunos de los subsidios otorgados a través del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) se redujo levemente, lo que es consistente con la mejora de los indicadores de los hogares pobres, cuyo número disminuyó en 8.3% en el último año. Los perceptores del Bonogás disminuyeron en 1.3%, para colocarse en 957,790; los beneficiados con el programa Comer es Primero se redujeron en 1.1% hasta 831,106 hogares, y los que percibían el Bonoluz decrecieron en 3.5%.

Por otro lado, el acceso de la población a un plan básico de salud ha logrado avances significativos. Al finalizar 2018, el número de afiliados al SFS se elevaba a 7.85 millones de personas, es decir el 76.0% de la población. De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), para diciembre 2018, el régimen contributivo afiliaba a 4,154,000 personas (53% de los asegurados), el régimen subsidiado a 3,620,000 personas (46%) y el restante 1% (76,197 personas) estaban afiliadas al régimen especial transitorio para pensionados. La tasa de cobertura del seguro de salud según sexo muestra una tendencia similar desde la puesta en marcha del SDSS, caracterizada por una mayor cobertura de la población femenina.

Estimaciones de la tasa de cobertura con seguro de salud para los distintos grupos etáreos, realizadas con la ENFCT, arrojan que la población joven tiene menor protección de salud que los adultos, particularmente en el grupo de 0-4 años, en el cual solo 52.4% de los niños están afiliados. Esto parece indicar que se mantienen problemas en la documentación temprana de los menores de edad.

La clasificación de las personas que tienen seguro por quintiles de ingreso ratifica la correlación entre estas dos variables. En 2018 solo 56.6% de la población ubicada en el primer quintil de ingresos tenía acceso a seguro, mientras en el otro extremo, 84.2% de las personas ubicadas en el quinto quintil contaba con protección en salud.

En el sistema de pensiones, el número de afiliados al finalizar 2018 era de 3,919,943, mientras que los cotizantes eran 1,935,968, esto es, 49.4% del total de los afiliados, relación que se ha mantenido estable a lo largo de la presente década. El número de cotizantes se incrementó en 5.4% entre 2017 y 2018. El Sistema de Capitalización Individual es el que da cuenta de algo más del 90% de los cotizantes al Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS).

El conjunto de los fondos de pensiones tenía un patrimonio, al 31 de diciembre de 2018, ascendente a RD\$599,976.13 millones, monto equivalente a 14.9% del PIB. Estos recursos han sostenido un notable ritmo de crecimiento, si bien decreciente con la maduración del sistema: la tasa de crecimiento promedio entre 2012-2015 fue de 24.2%, para 2016-2018 resultó de 17.7%, y en 2018 el crecimiento fue de 15.4%. Los instrumentos financieros utilizados para la inversión de los fondos de pensiones mantienen prácticamente la misma estructura de los últimos años, concentrados en valores emitidos por el sector público: Banco Central, con la mayor ponderación (44.7%), a pesar de que esta viene decreciendo (47.6% en 2015) y Ministerio de Hacienda, cuyo peso relativo ha venido aumentando (22.3% en 2015 vs. 30.1% en 2018). En lo que respecta a la rentabilidad real de los fondos, esta se mantuvo en 6.5%, igual que en 2017, rompiendo la tendencia decreciente observada desde 2015.

En cuanto a los logros educativos, el nivel de escolaridad promedio de la población de 15 años y más evidencia una tendencia al crecimiento en el período analizado. Entre 2008 y 2018, el indicador aumentó casi 1 año, tanto para mujeres como para hombres y se mantiene la brecha a favor de las mujeres. Por zona de residencia, se aprecia un progreso más sustancial en la población rural, que entre 2008 y 2018 aumentó el nivel promedio de escolaridad de 6.2 a 7.2 años, incremento superior al de 0.7 años observado en la zona urbana. Producto de esas evoluciones, la brecha urbano-rural se ha reducido de 2.8 a 2.4 años en el periodo indicado. Por nivel de pobreza, la tendencia al aumento de la escolaridad que se observa en el largo plazo es evidente para los indigentes y los pobres no indigentes, pero no resulta tan clara para el caso de los no pobres.

Durante los últimos tres años, en los cuales se dispone de información de la ENCFE, muestran una clara tendencia al incremento en el nivel secundario para ambos sexos, no así en los demás niveles. Sin embargo, al discriminar por zona de residencia, se observa que desde 2018 se ha venido registrando una sostenida tendencia al cierre de las brechas entre ambas zonas, tanto para la educación secundaria como para la universitaria.

El gasto público en educación sigue concentrándose en la educación básica (39.4%), seguido por planificación, gestión y supervisión educativa (27.6%), y, bastante lejos, por educación secundaria (10.6%) y educación superior (10.0%).

Las estadísticas relativas a la morbilidad por algunas de las enfermedades de notificación obligatoria (ENO) (tuberculosis, malaria, dengue, cólera y leptospirosis) indican que la tuberculosis continúa como líder de la morbilidad y mortalidad en las enfermedades infecciosas, mientras, la malaria, dengue y leptospirosis, tras haber registrado durante la primera mitad de la década brotes importantes, en los dos últimos años se mantienen en niveles de seguridad.

En la población infantil, de las enfermedades inmunoprevenibles, tétanos neonatal, sarampión, rubeola y difteria resultan en proceso de control y/o eliminación. En el caso de la tosferina, sin embargo, en 2018 se registró un incremento que cuadruplicó los casos de 2017 y fue responsable del total de

muerres entre las enfermedades prevenibles por vacunas (EPV), no obstante la adecuada cobertura inmunitaria de la DPT, similar a la alcanzada por el resto de las vacunas.

La tasa de mortalidad materna ha mostrado, a lo largo de la década, una fuerte resistencia a la reducción sostenida. Tras aumentos y reducciones a lo largo de la década, en 2018 registró el valor más alto (107 por cien mil nacidos vivos). Entre las principales causas obstétricas directas de esa mortalidad destaca, por su frecuencia y por su tendencia creciente, a la toxemia, las complicaciones en el puerperio y las hemorragias.

En cuanto a las condiciones de vivienda, de acuerdo con los resultados de la ENCFT, el déficit habitacional total se estimó en 2018 en unos 824,829 hogares, lo que implica una disminución de 0.6% respecto al año anterior. Esta evolución se generó en una reducción del déficit cualitativo 3.9% (17,226 viviendas), mediante la intervención en los principales componentes de las viviendas en cuanto a la materialidad (piso, techo y paredes) y el mejoramiento de los servicios sanitarios. Es de señalar la incidencia del INVI en esa evolución del déficit cuantitativo, a través del 5,099 pisos cambiados, 1,101 techos reparados y 160 viviendas dotadas de servicios sanitarios. El déficit cuantitativo experimentó un aumento de 3%, menor al incremento registrado en 2017, de 10%.

Las condiciones de seguridad ciudadana muestran un progreso sostenido. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes ha mantenido un patrón descendente desde 2011, al pasar de 25.1 en aquel año, a 15.4 en 2017 y en 2018 mostró una nueva reducción a 13.4. La tasa de homicidios por regiones evidencia que, con excepción de Enriquillo, se mantiene un claro patrón hacia la disminución, aunque se registren ligeros incrementos ocasionales. En lo que se refiere a los feminicidios y homicidios de mujeres, las tasas correspondientes registraron una disminución significativa, al pasar de 107 y 102 respectivamente en 2017 a 74 y 95 en 2018. Sin embargo, en estos casos, la alternancia de incrementos y reducciones anuales en el número de episodios registrados torna difícil inferir una clara tendencia.

La tendencia decreciente de las tasas de pobreza monetaria general y extrema observadas en el quinquenio 2013-2017 se mantuvo durante 2018, cuando se verificaron caídas similares a las de 2017; en estos dos últimos años se acumuló un ritmo de descenso más significativo que en los cuatro años previos. El porcentaje de personas en condiciones de pobreza general pasó de 25.6% en 2017 a 22.8% en 2018, para una reducción de 2.8 puntos porcentuales. En términos de número de personas, la disminución fue de 2.6 millones a 2.3 millones; esto es 264 mil personas superaron la condición de pobreza general. En la pobreza extrema, el porcentaje se redujo desde 9.3% en 2013 a 2.9% en 2018.

Esas importantes disminuciones de pobreza general y extrema se registraron tanto en las zonas rurales como en las urbanas y en prácticamente cada una de las regiones de desarrollo del país. La tasa de pobreza general en la zona urbana se situó en 22.1% y la extrema en 2.6%, lo que implicó caídas de 2.4 y 0.7 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con 2017. En la zona rural la tasa de pobreza general fue de 25.6% y la extrema de 4.1%, con disminuciones de 4.1 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente, notablemente más acusadas que en la zona urbana.

La evolución de la pobreza regional muestra una dinámica con algunas peculiaridades en 2018. En las regiones Higuamo, Cibao Noroeste, Cibao Sur, Cibao Norte, Metropolitana, Valdesia y Enriquillo se logró una caída en la tasa de pobreza general; las mayores disminuciones se observan en las dos primeras de estas regiones. En contraste, en Cibao Nordeste y El Valle se registraron incrementos, más importantes en la segunda, mientras que en Yuma la tasa se mantuvo sin cambios, lo que sugiere un estancamiento en la caída de la pobreza en esta región, aunque su nivel es menor que el agregado nacional.

El ingreso promedio mensual real per cápita alcanzó en 2018 el mayor ritmo de incremento observado durante el proceso de crecimiento sostenido de la economía nacional verificado desde 2014. El aumento real de ingresos de 7.9% con respecto a 2017 superó ampliamente el 3.2% registrado en el año previo. Es importante señalar que en 2018 el ingreso per cápita consiguió superar, en magnitudes reales, el alcanzado en 2002, previo al deterioro del poder adquisitivo ocurrido como consecuencia de la crisis bancaria.

La desigualdad en la distribución de los ingresos familiares, estimada a través de las mediciones a nivel de hogar obtenidas con las ENCFT de 2017 y 2018, no muestra una evolución tan favorable. Los resultados de 2018 indican un estancamiento o posible cambio de tendencia, lo que podría significar una ruptura del proceso de caída de la desigualdad que se venía observando en años previos. El coeficiente de desigualdad de Gini se estableció en 0.454 en 2018; esto es, un ligero incremento de 0.003 en relación con la estimación de 2017 y de 0.01 al comparar con 2016.

Respecto a la temática ambiental, en agosto 2018 se concluyó el segundo Inventario Nacional Forestal, estudio requerido para establecer la línea base para República Dominicana de la cantidad de carbono que capturan sus bosques. Se estimó que los bosques dominicanos almacenan casi 2 mil millones ton. CO₂, lo que, dado el tamaño del territorio, representa un aporte significativo a la reducción de CO₂ en la atmósfera planetaria. En ese momento, el indicador de cobertura forestal alcanzaba 43.6%, mayor a la medición previa y al objetivo del PNPSP 2017-2020. Al mismo tiempo, alrededor del 26% del territorio es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que contiene 128 unidades de protección, de las cuales, para 2018 72 contaban con vigilancia y protección. Por otro lado, en 2018 se realizaron 592 autorizaciones y evaluaciones ambientales, lo cual indica un muy buen ritmo para ir ajustando las actividades productivas a la normativa ambiental a fin de lograr el objetivo mencionado objetivo de la END 2030.